PRONUNCIAMIENTO DE LA UCA SOBRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

1. Por qué nos pronunciamos

La situación actual de la UES preocupa vivamente y con razón a muy distintos sectores del país. La importancia de esta institución y la gravedad de los acontecimientos ocurridos en ella durante los últimos años han convertido a la UES en un problema nacional.

Nuestra Universidad siente muy especialmente esta preocupación. Se trata en efecto de un problema universitario de alcance nacional. Y nosotros somos parte integrante de la labor universitaria en El Salvador. Si nada de lo que ocurre en el país nos debe ser ajeno, lo que ocurre en la realidad universitaria de El Salvador de ningún modo lo podemos considerar como extraño. Nuestra dedicación cotidiana a la cuestión universitaria nos sitúa en posibilidad y obligación de decir una palabra calificada sobre este problema.

Esta palabra, no obstante, ha de ser modesta y limitada. Queremos colaborar, pero nuestra posición parcialmente externa a los problemas de la UES, nos impide intervenir en sus cuestiones internas. Tan sólo podemos contribuir a poner un poco de claridad nacional en el problema y a favorecer un proceso que contribuya a que la UES salga de la gravísima situación en que ha caído. No nos mueven para ello intereses partidistas; nos mueve el bien del país y el bien de la Universidad.

2. Proceso de deterioro de la UES

La conciencia ciudadana ha ido llegando a la convicción de que la UES, tras un largo proceso de deterioro, ha llegado en las últimas fechas a extremos intolerables. La Universidad ha ido dejando de ser Universidad cada vez más. Desde 1970, tras un vigoroso esfuerzo de modernización institucional, empiezan a cobrar fuerza dentro de la UES tensiones contrarias, que hacen

cada vez más difícil el trabajo universitario. Aprovechándose de esta situación, el Presidente Molina interviene militarmente la Universidad. La intervención desata un proceso de nefastas consecuencias. Desde entonces las crisis universitarias se suceden más frecuente e intensamente hasta convertirse en una grave crisis ininterrumpida. Cambios constantes en su normativa legal y en su funcionamiento institucional, anulación progresiva de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, permutas incesantes de las autoridades, cierres de la Universidad y paralizaciones de la actividad universitaria, decrecientes rendimientos académicos, separación o amedrentamiento de los profesores, conflictos estudiantiles reprimidos violentamente, asesinato del Rector Dr. Carlos Alfaro Castillo. . . Todo esto prueba que el funcionamiento de la UES se ha deteriorado hasta extremos intolerables.

3. Condena de los últimos sucesos

La gravedad de los últimos acontecimientos no ha hecho sino mostrar el nivel en el que estaba sumida la UES. El establecimiento, mantenimiento y modo de actuar del cuerpo de vigilantes convertidos en policía universitaria; su apoyo por parte del Consejo de Administración Provisional, los asesinatos de varios componentes de la comunidad universitaria y el modo como ocurrieron, el disimulo inicial de estos sucesos por parte de las autoridades. . . todas estas son muestras evidentes de la descomposición de la UES.

Ante esta situación no podemos menos de lamentar y condenar estos hechos y, más en general, toda la conducta anti-universitaria que todo ello supone. La Universidad se ha ido convirtiendo en anti-Universidad, y esto nos resulta intolerable como ciudadanos y como universitarios. Lo que debiera ser lugar de estudio, de respeto, de libertad, de diálogo se ha convertido en todo lo contrario.

4. Causas estructurales de la crisis de la UES

Pero nada de esto ha sucedido como brote espontáneo aislado y ocasional ni se ha debido en última instancia a la incapacidad o inmoralidad de determinadas personas. Tiene causas más profundas, que, si no cambian, seguirán produciendo los mismos o parecidos resultados. Quisiéramos exponerlas brevemente para mostrar la gravedad estructural del problema y para facilitar el diagnóstico.

El problema tiene, ante todo, causas estructurales políticas. La UES está inmersa en la realidad del país, que repercute en ella de modo especial. Esta situación es no sólo de subdesarrollo sino de profundísimas tensiones sociales, de una progresiva pérdida de confianza en posibilidades reales de participación democrática y de un creciente irrespeto a la legalidad. Dada la naturaleza propia de la UES y dada su tradición histórica, es imposible que este deterioro de la situación nacional no se refleje en ella. Cuanta mayor tensión se dé en el país, más tensio-

nada se verá la UES, sobre todo si se cierran otros cauces políticos efectivos para dar curso constructivo a esa tensión. Las iniciativas eficaces para comenzar un proceso de reestructuración de la UES no pueden postergarse a espera de que la situación nacional se arregle, pero hay que comprender que algunos de sus problemas son de muy difícil manejo por culpa de esa situación.

El problema tiene también causas estructurales académicas. La necesidad de responder a una demanda social de muy precisas características sitúa a la UES en una posición singular. El crecido número de bachilleres (15,147 en 1977 frente a los 30.236 que se esperan para 1985), su baja preparación académica dada la estructura educativa del país, su presión por bajar los niveles académicos, presentan graves dificultades. La UES ha adquirido una magnitud y una complejidad, que hacen sumamente difícil su manejo. No está capacitada para responder al cometido que la sociedad le está exigiendo.

Pero hay otra serie de causas inducidas también de índole estructural, por más que su apariencia sea coyuntural:

a) Ante todo, la intervención del Gobierno, atento más al significado político de la UES que a su rendimiento académico, junto con la intervención de otras fuerzas socio-políticas, que se oponen al cambio y a las reformas sociales.

b) En segundo lugar, el establecimiento en la UES, en correspondencia con lo que sucede fuera de ella, de un régimen autoritario que basa su autoridad más en la represión y eliminación que en la participación y en la racionalidad. Esto ha llevado al control, despido y a la autoexclusión de algunos de los mejores talentos, que no ven posibilidades de trabajo universitario en esas condiciones.

c) Especial mención merece el proceso de politización de la UES. Cualquier fuerza social de un signo o de otro entiende que la UES es una de las instituciones básicas de nuestra sociedad. De ahí que intenten utilizarla o neutralizarla para sus propósitos políticos. Esta es una forma de negar la autonomía universitaria. Si los miembros de la comunidad universitaria y, sobre todo, do-

centes y autoridades tienen su principal centro de interés y de fidelidad no en la Universidad sino en otras instancias políticas, lo más probable es que actúen primariamente al servicio de ellas y no de los intereses propios de la Universidad.

d) Finalmente, está el importantísimo problema del estudiantado. Los aproximadamente 24.000 estudiantes actualmente matriculados se convertirán en más de 30.000 dentro de cuatro años. La UES no está preparada ni académica ni administrativamente para atender como es debido esta demanda. Por otro lado, junto a una mayoría apática en la línea política y poco preparada para un buen rendimiento, hay en la UES minorías estudiantiles muy politizadas, cuyo objetivo primario en algunos casos no ha coincidido con la existencia de una Universidad fuerte y democrática. La división y oposición entre las fuerzas políticas se ha reflejado a veces dentro de la UES entre agrupaciones estudiantiles preocupadas más de sí mismas y de su robustecimiento o de finalidades universitarias demagógicas —caso de las cuotas estudiantiles—, que de las necesidades reales de la Universidad y del pueblo salvadoreño. Su sana preocupación por el cambio de las estructuras injustas del país no ha encontrado siempre la forma universitariamente adecuada para manifestarse.

Preocupaciones genuinas por el mejoramiento del país y de la Universidad se han visto mediatizadas por esta a veces extrema y desviada politización, resolviéndose en acciones confusas y desproporcionadas. Algunas iniciativas, sin embargo, han contribuido a dinamizar el compromiso de la UES con las necesidades del pueblo salvadoreño.

5. Posibles principios de solución

Todos estos problemas o causas de problemas muestran que la solución ha de ser lenta y difícil. De ningún modo sería una solución global la sola reposición de piezas, como si el mal radical estuviera en las personas que hoy rigen la UES y no en las estructuras.

Ante todo, es indispensable acertar con el diagnóstico. Desde 1972 se ha diagnosticado el mal de la UES como subversión izquierdista. Así como en el país cualquier intento serio de reforma ha sido caracterizado y perseguido como subversión, lo mismo ha ocurrido con la UES. Se piensa que los males que en ella se reflejan no son males reales sino productos de mentes subversivas que envenenan a los estudiantes. La respuesta está en consonancia con el diagnóstico: contra la subversión, la represión. Autoridades represivas, cuerpos de vigilancia represivos. Los resultados ahí están: la anulación de la Universidad y su descomposición orgánica, que no ha respetado ni siquiera el límite del asesinato.

Es, entonces, evidente que la respuesta no puede ser esa. La respuesta no puede consistir en buscar formas más suaves y disimuladas de represión. Tiene que ser una respuesta a las verdaderas causas del mal universitario, una respuesta compleja y articulada. Algunas de sus características serían las siguientes.

En primer lugar, es preciso buscar y respetar la especificidad universitaria. Si la Universidad no se concibe como Universidad y no se la estructura como tal, su funcionamiento no puede ser universitario. Dos elementos esenciales no pueden faltar en la identidad universitaria. El primero, el ser cultivadora del saber que necesita el país para salir de su postración social; el segundo, el desempeñar la función política que le corresponde. El ser cultivadora del saber implica toda una serie de condiciones en la elección del cuerpo profesoral, en los planes de investigación y de docencia, en el nivel de la exigencia académica. El desempeñar una función política supone intervenir por medios universitarios en la transformación del país hacia metas más racionales y justas. Frente al reduccionismo profesionalizante y frente al reduccionismo politizante, la Universidad debe responder con la plenitud concreta de su actividad académica y de su participación transformadora de la realidad nacional.

En segundo lugar, se debe trabajar por la democratización responsable de las estructuras universitarias. Esto implica, por lo pronto, el saneamiento radical de las autoridades actuales (CAPUES) y la desaparición total del "cuerpo de vigilantes" (policía universitaria) y de todas las medidas represivas; es aquí donde se ha manifestado más virulentamente la crisis y es aquí, por tanto, donde hay que intervenir de inmediato para recuperar un mínimo de credibilidad.

Parte importante de la democratización está en una política de recuperación de los talentos y vocaciones universitarias, que por inconsultas presiones de las derechas o de las izquierdas han desaparecido de la UES: con los actuales recursos humanos no se ve fácil la posibilidad de una fuerte mejora de la Universidad. Pero para que esos talentos universitarios quieran regresar, es menester ofrecerles la seguridad de que están siendo reincorporados a una Universidad concebida y regida universitariamente. Un cuerpo de docentes altamente cualificado y comprometido es la base más firme para la marcha democrática de la Universidad.

Dentro de este marco de la democratización ha de intervenir el movimiento estudiantil. Nadie duda de la capacidad potencial de los estudiantes para la mejora de la Universidad tanto en la línea académica como en la línea del compromiso social. Pero conviene volver la mirada hacia atrás para medir críticamente su contribución desde 1970 hasta hoy. Junto a aportes muy positivos encontraremos graves errores, que han obstaculizado el avance académico y político de la Universidad. Los movimientos estudiantiles no pueden convertirse en puro reflejo de instancias políticas extra-universitarias; más aún, sólo podrán servir adecuadamente esas instancias cuando crezca realmente su nivel universitario y cuando defiendan, junto con los docentes, la máxima autonomía para la Universidad. La autonomía no es sólo tal respecto del Gobierno sino también de cualquier fuerza política. Sin ser incompatibles no pueden confundirse el compromiso específicamente universitario con el pueblo y los compromisos con otras organizaciones que buscan servir los intereses populares. Tal cambio de perspectiva permitiría una cierta racionalización y unificación del movimiento estudiantil no necesariamente en sus estructuras orgánicas sino en sus objetivos universitarios inmediatos. Hay sin duda en el movimiento estudiantil signos esperanzadores de un compromiso verdaderamente universitario con las necesidades reales del país. El reforzamiento de estos signos les daría una fuerza mayor para contribuir al mejoramiento y a la democratización de la Universidad.

Sólo sobre estas bases reales de democratización tiene sentido luchar en favor de la democratización formal de los órganos de gobierno universitario y del cambio de las actuales disposiciones legales. De poco serviría esto, si no hubiera base real para la entrada en una nueva etapa de la UES.

En tercer lugar, el Gobierno debe contribuir a este proceso renovador. Lo debe hacer de dos formas fundamentales. Una positiva, propiciando la democratización del país; otra negativa, prohibiéndose a sí mismo toda intervención anti-democrática en la UES. Por lo que toca a la primera, es claro que si la enorme tensión social y política del país no encuentra su salida propia a través de un proceso de democratización que posibilite la participación de las organizaciones populares, de los sindicatos, de los partidos políticos, etc., tratará de buscarla a través de la UES, que no está preparada institucionalmente para aguantar tal tensión. Por lo que toca a la segunda, es también claro que la experiencia pasada ha demostrado el daño que causa todo intervencionismo; los males de la Universidad sólo pueden arreglarse universitariamente y el Gobierno no está en condición de intervenir universitariamente.

A su vez la triste lección de lo sucedido en la UES puede servir pedagógicamente para la reelaboración de una respuesta democrática a los problemas del país. El esquema subversión-represión es un esquema simplista que deja fuera las mejores posibilidades de acción democrática.

6. Un posible principio práctico de solución

Aunque no es nuestro propósito adelantar soluciones más concretas al problema de la UES, cosa que le compete a ella y no a la UCA, quisiéramos apuntar a un principio práctico de solución. Los enormes problemas de la UES, las difíciles tareas que le competen, el estado en que actualmente se halla, parecen exigir la creación de una estructura dirigente provisional, que dé los primeros pasos sólidos para un firme proceso de democratización y restauración de una verdadera vida universitaria.

Esta estructura dirigente no puede surgir tan sólo del pasado, de hombres que sirvieron con eficacia y honestidad a la Universidad. Tampoco puede surgir sólo del presente como si dentro de la UES se encontraran ya los hombres de la solución, cuando muchos de los mejores han sido desalojados de ella. Debería tener en cuenta hombres indiscutibles del pasado y hombres que representan fuerzas respetables del presente. La búsqueda de estos hombres con amplia aceptación y respaldo del demos universitario y de la ciudadanía no puede hacerse de espaldas a quienes han promovido desde dentro de la UES el primer intento de saneamiento. Deben, por tanto, estar representados en ella docentes y estudiantes. Se impone una negociación racional en la que se debe buscar la coincidencia en lo fundamental sin olvidar cuáles son las posibilidades reales de la actual coyuntura política. La obligación fundamental respecto de la Universidad es hoy salvarla. Otras obligaciones pueden esperar.

7. Necesidad de apoyar el proceso

Terminamos por donde comenzábamos. La UES es una parte fundamental de la labor universitaria en el país. Si no funciona, es imposible que esa labor se cubra a cabalidad. Y si en el país no se cumple adecuadamente el trabajo universitario, cada vez marcharemos peor. Y, sobre todo, cada vez le irá peor a quien sostiene económicamente la Universidad, el pueblo salvadoreño. Todos en El Salvador, pero de modo especial las instituciones y los hombres con vocación universitaria, estamos obligados a contribuir. Se puede hacer de muchos modos. Busquemos los mejores y los más eficaces.

San Salvador, Noviembre 14, de 1978.

CRISIS ECONOMICA, CRISIS DE PATRIOTISMO

Una vez más tenemos que reflejar en nuestras páginas la preocupación profunda por la constante deterioración de las condiciones sociales y económicas del país.

No se han publicado nuevos datos alarmantes, pero en círculos informados, círculos de negocios y del gobierno, corre la voz de alerta ante la iliquidez del sistema financiero, y la consiguiente restricción del crédito; la insuficiencia de las reservas internacionales para las necesidades ordinarias de la importación, la dificultad de la Hacienda Pública para financiar el presupuesto, el incremento del desempleo y el incalculable sufrimiento humano que éste genera.

Las causas inmediatas y directas de estos problemas son bien conocidas: no se vendió el café, salió mucho capital, nadie invierte, la inflación se comió los ahorros, etc. No vamos a repetir esta letanía de calamidades económicas, vamos a intentar entrar hasta una de las raíces profundas de estos problemas con la única intención de que se ponga pronto y decidido remedio a lo que es remediable y corregible.

En el fondo de la cuestión hay una espantosa falta de patriotismo. Porque ha sido falta de patriotismo lo que ha impulsado al capital a atravesar furtivamente nuestras fronteras en busca de bancos misteriosos y seguros. Quizás no se pueda ni se deba pedir patriotismo al capital; quizá sea ingenuidad esperar que el capital se quede en El Salvador, cuando el futuro se ve negro o, por lo menos, incierto. ¿No tiene el capital que obedecer leyes tan importantes como la de la propia conservación y la del constante crecimiento? Efectivamente, ¿en nombre de que ley de la economía pedimos patriotismo al dinero? El dinero no tiene patria. La moneda de un país se cambia por la de otro previo pago de una pequeña comisión. Un colón es cuarenta centavos de dólar. El colón es residente, no es natural de El Salvador.

Sin embargo, el valor que la moneda representa y encarna sí tiene patria y nacionalidad. El valor ha salido de la tierra de

Cuscatlán y del trabajo del hombre salvadoreño, pero por desgracia, no siempre regresa a la tierra de donde nació. Al sacar de El Salvador el valor salvadoreño, convertido en capital apátrida, se hace una gran injusticia al país, se le despoja de lo que es suyo, se le roba. La fuga de capitales es un crimen de lesa patria.

El país clama por una riqueza que es suya —“res clamat dominum”—. ¿Es que El Salvador, como comunidad nacional, no tiene derecho de propiedad? ¿Es que el derecho a usar de la riqueza de personas individuales es más importante que el derecho de todo un pueblo? Nadie tiene derecho a saquear El Salvador; nadie, en virtud de ningún principio filosófico o ley económica, puede privar al país de su riqueza. Sobre todo cuando esta privación se reparte desproporcionadamente y causa enormes sufrimientos humanos.

Por esta gravísima razón pedimos al Gobierno que detenga con todos los medios a su alcance este atentado contra la patria, esta campaña de subversión contra la base económica de la paz nacional y la convivencia ciudadana. No hay una causa individual que produzca hoy más inestabilidad e inseguridad para el futuro que esta sangría de capitales. El Gobierno lo está experimentando en sus propias finanzas. Y es que, en parte, está pagando la aceptación acrítica de aquella filosofía que predica que propiciando los intereses particulares y privados se llega infaliblemente al Bien Común. No es así cuando falta el patriotismo y la solidaridad. Al contrario, la excesiva tolerancia con intereses privados egoístas ha conducido al Estado a una situación socialmente impopular y técnicamente difícil de la que sus falsos aliados no le quieren ayudar a salir.

Los gobernantes del país deben analizar, desde la situación económica en que ahora estamos, a dónde les ha empujado la alianza con un tipo de capitalismo asustadizo, egoísta y antipatriota. Deben examinar las leyes objetivas que rigen el funcionamiento de la fuga de capitales y que, juntamente con medidas severas para cortarla, pongan las condiciones políticas necesarias para que no se produzca. El gobierno puede tomar la iniciativa para conformar el futuro del país: oyendo las justas reclamaciones económicas y políticas de las organizaciones populares, dando juego libre a los partidos políticos, respetando las reglas de un Estado de Derecho, ampliando el ámbito de la legalidad, lanzándose, en fin, por el camino franco de la democratización. ¿No es curioso observar que los capitales salvadoreños busquen precisamente los países de más sólida tradición democrática?

No sabemos de ninguna medida técnica que pueda traer más alivio y esperanza a la economía que la previsión de un futuro democrático y pacífico.

SOMOCISMO GENOCIDA

Los hechos que ensangrentaron a Nicaragua en el mes de la independencia centroamericana han conmovido a la conciencia mundial y especialmente la de los hombres que en Centroamérica aman la libertad. Difícil es encontrar quien se atreva a disculpar la masacre somocista y los que llegan a disculparla representan una prueba más del poder corruptor del somocismo.

Nosotros, como universitarios centroamericanos, no podemos menos de condenar sin paliativos el genocidio somocista, uniendo así nuestra voz y solidaridad con todos aquéllos que odian la muerte y aman la vida. No podemos menos de esperanzarnos con el surgimiento en Nicaragua de un poderoso movimiento de protesta y de lucha en busca de una libertad todavía no estrenada por el pueblo nicaragüense. No podemos menos de apoyar según nuestras posibilidades el rechazo al somocismo y dar nuestro aliento a quienes trabajan y sufren por la construcción de una patria nueva.

Pero la forma universitaria de rechazar y condenar, de apoyar y animar, exige analizar, aunque sea de forma sumaria, lo que está ocurriendo en Nicaragua. Sólo alcanzando alguna claridad sobre lo que allí sucede se podrá lograr la conciencia crítica adecuada y la capacidad de acción requerida. Pues bien, en una primera aproximación debe decirse que el somocismo ha mostrado su verdadera naturaleza al desembocar en un manifiesto genocidio para mantenerse en el poder y asegurar la depredación. El lento y disimulado genocidio que el somocismo ha propiciado durante medio siglo ha mostrado su faz verdadera en esa masacre masiva propiciada por las armas airadas y sanguinarias de la Guardia Nacional.

No basta, sin embargo, con esta respuesta. Es menester preguntarse por lo que ha hecho posible el somocismo.

La primera respuesta tiene que ver con la política de los Estados Unidos. El somocismo y la Guardia Nacional son un engendro histórico de los Estados Unidos y han sido los Estados Unidos su principal y constante valedor. En 1927 escribía el

subsecretario de Estado Robert Odds para justificar la intervención norteamericana en Nicaragua:

"nuestros ministros acreditados ante las cinco pequeñas repúblicas. . . han sido consejeros cuyos consejos han sido aceptados virtualmente como ley en las capitales donde residen. . . Nosotros controlamos los destinos de Centroamérica y lo hacemos así por la simple razón de que el interés nacional nos exige absolutamente seguir semejante procedimiento."

Fueron efectivamente los Estados Unidos quienes promovieron y respaldaron la Guardia Nacional y el somocismo, y los que han procurado en estos cincuenta años la fortaleza y la unión de ambos, como si esto representara la mejor salvaguarda de sus intereses militares, políticos y económicos en el área centroamericana. Todavía hoy, tras la bárbara represión somocista, algunos representantes y senadores norteamericanos han apoyado expresamente a Somoza como amigo de su país y como freno contra el comunismo. El mismo Robert Odds continuaba su argumentación con estas palabras, de cuya actualidad pueden juzgar nuestros lectores:

"hasta ahora Centroamérica siempre ha comprendido que los gobiernos que nosotros reconocemos y apoyamos permanecen en el poder, mientras que aquéllos que no reconocemos y apoyamos, caen. Nicaragua ha llegado a ser un caso de prueba. Es difícil ver cómo podríamos permitir que nos derroten"

¿Sigue siendo hoy la política norteamericana el garante del somocismo? Cuando Costa Rica y Venezuela, Estados democráticos, condenaron severamente las acciones genocidas del somocismo, Estados Unidos no les acompañó oficialmente en la condena, como no les acompañaron otros Gobiernos de la OEA, incluido El Salvador. En estas ocasiones, en las que están en juego miles de vidas humanas, resulta nugatorio apelar al principio de no intervención. Estados Unidos no lanzó su peso político en el momento crucial de la represión armada, como no lo puso en las décadas de la represión política. Quiso idealmente impedir el genocidio pero sin hacer saltar el somocismo. Y querer aquello sin querer esto es un puro juego diplomático de apariencias.

Confrontada con esta situación, la política norteamericana de los derechos humanos mostró claramente sus límites. Los derechos humanos que, según la doctrina Carter, superan las fronteras nacionales no lo hicieron en este caso, pues, según el Pentágono, estaban en juego sus propios intereses nacionales. Los derechos humanos tienen un límite en los intereses políticos y militares de los Estados Unidos. Dicho de otro modo, no parece que se llegará a defender derechos humanos universales cuando estén en juego presuntos derechos norteamericanos concretos. Es un límite estructural de esta doctrina, que además se ve agravado por presiones de intereses, que poco tienen que ver con los verdaderos derechos del pueblo norteamericano.

Pero tras el somocismo no están solos los Estados Unidos. Ha estado también —y de qué forma— el capitalismo criollo nicaragüense. Es cierto que no pueden ignorarse algunos esfuerzos

nacidos del campo de la burguesía para derrocar el somocismo en fechas ya lejanas. Hubo incluso quienes pusieron en algún peligro sus intereses económicos inmediatos en beneficio de intereses democráticos. Sin embargo, la lógica del dinero y la práctica de los intereses económicos no permitió al capitalismo nicaragüense plantear desde el fondo y a la larga una política anti-somocista consecuente. Al contrario, ese capitalismo prosperó al aire de las ventajas somocistas y tiene a su cargo una larga cadena de responsabilidades.

En los últimos años una parte del capital se ha opuesto a Somoza, aunque no con la misma fuerza se ha opuesto a toda forma de somocismo. Dicen los análisis dogmáticos que lo han hecho por haber visto en peligro sus intereses económicos a larga distancia. Pero la realidad de los hechos no admite una explicación tan simple y mecánica. Puede pensarse en un capitalismo racional que, sin dejar de ser capitalista, vea como intolerable los abusos feudales del clan somocista. Es posible pensar en un capitalismo con algún interés patriótico y democrático y no es buena táctica el estar viendo al diablo por todas partes. Tal vez en alguna medida ese capitalismo se está dando en Nicaragua ante la lección de lo que es el capitalismo bárbaro de Somoza. Pero para que este capitalismo nuevo pueda tomar una cierta participación en el cambio debe aprender la lección y confesar sus culpas pasadas no cayendo de nuevo en ellas. Cuando se pone por encima de todo el interés económico, se puede llegar a extremos genocidas y se puede colaborar con los regímenes más infames sin el menor escrúpulo moral. Luego vienen las trágicas consecuencias.

*Sin embargo, no todo estaba corrompido en el pueblo nicaragüense. Algunas fuerzas se opusieron fuertemente al somocismo. Una de ellas la representada por Pedro Joaquín Chamorro al frente de **La Prensa**. Más allá de lo que pudieron ser batallas episódicas, Pedro Joaquín Chamorro anatematizó con peligro y clarividencia durante años algunos de los males políticos y económicos producidos por los Somoza. Mucho más tarde se adhirió al mismo frente crítico la Iglesia Católica, aunque con vacilaciones constantes como en los casos de la obsequiosa preocupación por la salud de Anastasio Somoza de parte importante del*

Episcopado con ocasión del ataque cardíaco del presidente y el caso de la connivencia pública de la nunciatura con Somoza en los momentos más trágicos de la masacre somocista.

Entre quienes se opusieron más firme y bravamente al somocismo están los integrantes de ese movimiento complejo y pluriforme que es el sandinismo. Sin entrar en el fondo de esa complejidad y pluriformidad ha de reconocerse que este movimiento vio claramente no sólo la intolerabilidad del dominio político y económico del somocismo sino sobre todo la profunda conexión de su dictadura política con su dictadura económica. Vieron claramente que Somoza actuaba como si Nicaragua fuese una finca de su propiedad y que el capitalismo de Somoza no amaba la patria nicaragüense sino la finca de su propiedad. Vieron asimismo que el somocismo es una consecuencia del capitalismo y una de sus formas.

Así se comprende que el sandinismo se haya revestido de formas anti-capitalistas y aun de formas marxistas. Si el capitalismo se ha identificado históricamente en Nicaragua con el somocismo, el anti-somocismo más radical tiene que ser en Nicaragua anticapitalista. ¿Quién tiene, entonces, la culpa del peligro comunista? Sin embargo, la ingenuidad política de creer que es viable en la zona de influencia norteamericana una toma del poder por quienes se profesan expresamente marxistas o por delegados de ellos, así como la ingenuidad histórica de creer que es viable en las actuales etapas del desarrollo social una sociedad y una economía socialistas, ha llevado a poner obstáculos innecesarios no sólo para el derrocamiento del dictador sino para el resquebrajamiento del somocismo. La historia tiene sus propios pasos y aunque a veces es posible saltar cualitativamente algunos por la presencia de poderosos factores subjetivos muchas veces el salto pretendido implica retrocesos. Tal vez el asalto al poder de una fracción sandinista a través de una insurrección popular no midió bien las posibilidades reales de éxito total ni los costos humanos de la operación. Con todo, su acción ha supuesto un avance en el proceso de destrucción del somocismo. No sólo puso al descubierto sus entrañas genocidas sino que hizo avanzar la conciencia colectiva y la persuasión internacional de su intolerabilidad. Sin su acción no se hubiera visto la urgencia de la mediación y la necesidad del derrocamiento de Somoza.

Es difícil proponer desde fuera caminos de avance. ¿Llevará la mediación a una salida transitoria que dé paso a una situación en la que se pueda trabajar arduamente en la reforma democrática y en la reforma social? ¿O se quedará la mediación en un somocismo sin Somoza, que vuelva a repetir los defectos esenciales del capitalismo somocista? ¿Tendrá viabilidad política una solución que no satisfaga las exigencias más básicas del sandinismo? ¿Tendrá sentido un nuevo ataque armado de una de las fracciones del sandinismo, o el sandinismo debería trabajar unido de otra forma, aprovechando eso sí el inmenso capital de popularidad que ha ido recogiendo?

La respuesta a estas preguntas va a depender mucho de dos factores. El primero sería el resultado de la mediación: si se alcanza una cota mínima para un serio trabajo político y so-

cial, que no estuviera muy por debajo de las propuestas iniciales del Frente Amplio de Oposición (FAO), las condiciones serían muy distintas de si los resultados son escasos. El segundo sería la presión ciudadana de las fuerzas populares y de los sectores progresistas: sería dolorosísimo que no se capitalizase el sufrimiento de tantos meses de huelga y de tantas víctimas de la represión.

Nicaragua está en capacidad de dar un paso importante en el camino de su liberación. Debe ser apoyada para que lo dé. Bien lo merecen sus muchos años de opresión y su repudio de la tiranía. Todos los pueblos de Centroamérica la deben apoyar. Porque no debemos olvidar que lo que allí está pasando nos está pasando a todos nosotros.